

América Central en transición. Entre un pasado imperial y un futuro incierto

Jonas, Susanne

Susanne Jonas: Cientista social estadounidense. Especialista en temas de política internacional y procesos políticos centroamericanos.

Actualmente, varios observadores sostienen que América Central ha alcanzado el «fin del ciclo revolucionario» y se encamina hacia la tradicional subordinación a los Estados Unidos. Los acontecimientos desde 1989, comenzando con la invasión estadounidense a Panamá y la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua, parecen confirmar este punto de vista - sobre todo, a raíz de la victoria militar de Estados Unidos en 1991, en la Guerra del Golfo Pérsico -. Pero si adoptamos una perspectiva de largo alcance, vemos que el futuro no está a tal punto determinado, y el balance es menos unilateral de lo que puede parecer en un principio

Las luchas de la década del 80 - que siguieron a dos décadas de cataclismos y resistencia antes del triunfo sandinista en 1979 - han visto tantos avances como retrocesos. Esas luchas han extraído un saldo dolorosamente alto en vidas humanas - más de 200.000 personas han sido asesinadas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala -. Pero, a pesar de estos costos - sostendré aquí - el proceso revolucionario de la década del 80 ha transformado completamente la región y su gente, y se puede esperar que continúe en el futuro, aunque bajo nuevas formas y sobre nuevos términos. Dado que las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala están finalizando a través de negociaciones más que por la derrota de las fuerzas revolucionarias, la región nunca volverá a ser simplemente el «patio trasero» de los Estados Unidos.

Precisamente porque no puede haber «retorno» al pasado anterior a la década del 80, la del 90 propondrá nuevos desafíos. Especialmente en vista de los rápidos y masivos cambios en el contexto internacional, será un tiempo de gran incertidumbre y sin duda traerá nuevos problemas para América Central. El quiebre del orden existente es evidente (por ejemplo, en el desastre económico a lo largo de toda

la región); pero las formas y objetivos de los esfuerzos para cambiarlo no están todavía claros. La ventaja de estos esfuerzos dependerá por entero de la habilidad de los movimientos populares y revolucionarios para proyectar un nuevo punto de vista y desarrollar estrategias alternativas a las políticas económicas neoliberales y de contrainsurgencia.

Nicaragua, El Salvador, Guatemala

En Nicaragua, la gente llevó a cabo una revolución y sobrevivió nueve años al ataque constante de Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo, a través de su guerra devastadora militar y económicamente, EEUU fue capaz de elevar el costo hasta un nivel intolerable, y de este modo, alcanzar su meta de sacar a los sandinistas del poder del Estado. Los logros materiales de la Revolución fueron, desde el comienzo, limitados, e incluso de algunos de ellos fueron completamente invertidos sus resultados, por la determinación estadounidense de convertir un ejemplo positivo en un ejemplo negativo (en principio a través de la guerra de los Contras); pero otros aspectos de la Revolución fueron institucionalizados en la Constitución de 1987, y no pueden ser desconocidos sin generar nueva violencia. Por el contrario, los sandinistas contribuyeron a poner las bases para una democratización profunda de la sociedad nicaragüense - tanto en su cultura política como en sus instituciones - y emprendieron un experimento único de pluralismo revolucionario, basado en el sistema pluripartidista e integrando la democracia representativa con la popular/participativa. Ellos llevaron adelante las tradiciones históricas de Nicaragua y, en varios aspectos, tomaron el único camino abierto que tenían, dadas las condiciones internacionales en la década del 80. Esto no significa minimizar varios de los errores que cometieron en áreas en que tuvieron alternativas posibles - errores que sólo comenzaron a ser examinados después de febrero de 1990 -.

La derrota de los sandinistas en las elecciones de 1990 - que fueron mantenidas bajo una especie de cerco - no fue en sí misma un cataclismo catastrófico (como sucedió con el golpe chileno de 1973 o con la «liberación» de Guatemala de 1954), sino que acentuó las tendencias que estaban en ese momento en movimiento. Vista en su totalidad, la experiencia de Nicaragua durante la década del 80 demostró que la paz sólo podría lograrse (la guerra de los contras sólo podría terminar) a través de la concertación o el acuerdo político. Particularmente después del comienzo del Pacto de Paz centroamericano en 1987, los sandinistas ya habían hecho significativas concesiones a la oposición civil; incluso si hubiesen ganado las elecciones de 1990, habrían tenido que emplazar nuevos acuerdos, sobre todo en lo que respecta a «compartir el poder». De manera inversa, ahora que se encuentran en la oposi-

ción, los sandinistas y los movimientos sociales populares continúan siendo la fuerza política más poderosa en el país, ciertamente lo bastante fuerte como para continuar la democratización de la sociedad nicaragüense y procurar de facto el poder compartido con la Unión Nacional Opositora (UNO) si Estados Unidos no lo impide. La única alternativa posible a compartir el poder será una reanudación de la guerra civil.

Al mismo tiempo, las condiciones económicas en la Nicaragua post-sandinista son más devastadoras que antes para las clases populares: una inflación meteórica, agravada por la remoción de los seguros sociales establecidos durante el período sandinista, deja a mucha gente en un aprieto desesperado. Por el momento, la inhabilidad de la UNO para corregir la situación económica crea un profundo descontento con el gobierno y se convierte en circunstancia propicia para los sandinistas; pero esto no puede ser una garantía en el largo plazo, pues el descontento popular podría derivar hacia la apatía y el descreimiento. Para encarar esta situación, los sandinistas enfrentan una tarea formidable. Más allá de preservar su unidad, deben satisfacer las demandas de sus bases populares, donde la gente no está necesariamente inclinada a compartir lo que percibe como un «pacto» arreglado en la cúpula entre los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de la UNO. El FSLN estaría caminando sobre una cuerda muy delgada, porque debe dirigir aquellas demandas y combatir contra nuevas medidas antipopulares, pero sin provocar una crisis total para los «moderados» de la UNO que se hayan inclinado a negociar con ellos. Más urgentemente, los sandinistas habrán de proyectar una clara dirección para su partido (tanto electoral como de movilización) y ofrecer claras alternativas a las políticas económicas neoliberales.

Más allá de Nicaragua, la región entera ha padecido profundas transformaciones estructurales e interrupciones políticas. Los países de Centroamérica han sido sacudidos por varias crisis económicas: primero la crisis de la tierra en las zonas fronterizas, resultado de la expansión de la agricultura de exportación capitalista y una nueva ola de expropiaciones a los campesinos; en segundo lugar, siguiendo los shocks del petróleo de 1973 y 1979 y la caída estrepitosa de los precios de sus exportaciones básicas, una depresión generalizada a través de la década del 80, comparable en magnitud y gravedad a la década del 30. Estas crisis han causado desarticulaciones masivas de población, y han restaurado las desigualdades sociales más profundamente de lo que los regímenes existentes podrán resolver. En El Salvador y Guatemala, dichas crisis explotaron en prolongadas guerras civiles, que llevaron al establecimiento de regímenes que tuvieron que enfrentar serias oposiciones de las fuerzas populares y revolucionarias.

En ambos países, las fuerzas populares han mostrado sorprendentemente, a lo largo de la década, su elasticidad como respuesta a la represión masiva; por su parte, los movimientos revolucionarios han mostrado considerable habilidad para aprender de sus errores e incrementar su flexibilidad para volver a definir sus metas de acuerdo con las nuevas realidades nacionales e internacionales - específicamente, presionando en favor de resoluciones negociadas a las largas guerras civiles. Esto les ha dado creciente legitimidad, en relación con su situación en 1980.

El Salvador, desde casi todos los sectores de la sociedad, ha tenido, hacia finales de la década del 80, fuertes presiones para una justa finalización de la guerra, desafiando la determinación de Estados Unidos, las fuerzas armadas y la oligarquía de no negociar. En noviembre de 1989 la ofensiva del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) ha intentado, ante todo, demostrar la necesidad de negociaciones serias. La consecuencia al largo plazo de esa ofensiva podría ser la emergencia de un sector de la burguesía salvadoreña que prefiera las negociaciones en lugar de una nueva destrucción de la economía (es decir, sus propiedades) debido a una consecución de la guerra. Incluso puede haber algunos oficiales de las fuerzas armadas que favorezcan las negociaciones, pero que sólo irán más allá si EEUU modifica su reiterada política de oposición. Estas dinámicas complejas han quedado claras en las negociaciones del gobierno y el FMLN que se desarrollaron a lo largo de 1990 y 1991. A cambio de las escaladas periódicas de la guerra, el proceso de negociación se mantuvo; sin embargo, continuó estancando el resultado central el tema de la reestructuración de las fuerzas armadas, en el que tanto el gobierno de El Salvador como el de Estados Unidos rechazaron hacer concesiones.

A principios de la década del 90, la cabeza del Comando Sur de Estados Unidos reconoció públicamente que el FMLN no podría ser militarmente derrotado; a pesar de ello, EEUU no cesó completamente su política previa de continuidad de la guerra hasta la derrota del FMLN, en lugar de terminarla a través de negociaciones. A finales de 1990, la administración Bush fue forzada a cumplir con los cortes que hiciera el Congreso a la ayuda militar para El Salvador; pero tuvo la primera oportunidad provechosa en enero de 1991 (bajo el pretexto de la guerra del Golfo) para restablecer esa ayuda. Consecuentemente, mientras de manera verbal reconocía la necesidad de negociaciones con el FMLN, Washington ha mantenido una posición de línea dura, opuesta a las estrategias de las Naciones Unidas y no ha querido hacer concesiones reales respecto de cuestiones decisivas.

En los últimos años de la década del 80, entre tanto, el FMLN aprendió la «lección de Nicaragua»: contemplar la destrucción de Nicaragua a través de la guerra militar y económica durante la década del 80 (aun antes de las elecciones nicaragüenses de 1990) contribuyó a un cambio gradual de la estrategia del FMLN: desde el objetivo de la «toma de poder» hacia la posibilidad de ganar una participación en él.

Washington ha dejado en claro, aun bajo Carter, que no permitiría «otra Nicaragua» (otra victoria revolucionaria); y la política de Reagan demostró la capacidad de EEUU para castigar (destruir) a Nicaragua. «Tomar el poder del Estado» se hace hoy algo completamente impracticable, y los revolucionarios en El Salvador (y Guatemala) aprendieron a intentar otras rutas para la realización de las demandas populares - negociaciones, participación en el poder, movilizaciones populares, incluso competencia electoral por el poder (si su integridad podría ser garantizadas) - mientras continuaban con la acción militar. Al mismo tiempo, estos movimientos han redefinido la relación de las confrontaciones armadas con las luchas políticas de base popular (esta última no ha sido un instrumento de aquellas), y el rol de las demandas democráticas.

Guatemala ha sostenido la más larga y sangrienta insurgencia/contrainsurgencia del hemisferio, una guerra de treinta años que costó 200.000 vidas desde 1960. En las últimas dos décadas el movimiento de la guerrilla hizo un importante avance más allá de la limitada y desprestigiada estrategia de foco de los 60, cuando comenzó a pronunciarse tanto por reclamos de identidad étnica como de clase y concentró su atención en las mayorías indias del país como centro de la lucha revolucionaria. Sin embargo, los levantamientos masivos de finales de los 70 y principios de los 80 en las zonas montañosas de los indios sufrieron una derrota importante en 1981-1983 como resultado de la respuesta genocida de las fuerzas armadas, que borrarón 440 pueblos de la faz de la tierra, y mataron más de 100.000 civiles desarmados. Hacia finales de los 80, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se recuperó de su derrota y una vez más tomó iniciativas políticas y militares, mientras las organizaciones populares se comprometieron en un lento y difícil proceso de reconstrucción. Por todo esto, la guerra civil en Guatemala parece la más difícil de terminar; su continuación afectará a la región como un todo.

En 1990-91, la guerra se intensificó, pero con divergencias importantes respecto de los treinta años anteriores. En algunos momentos, la URNG ha reconocido que no podía «tomar el poder del Estado» militarmente, y que, en cualquier caso, el costo de continuar con tal estrategia podría ser muy alto. Por esto, la URNG se ha visto

presionada a negociar desde el retorno del gobierno civil en 1986. Durante años, el gobierno insistió inflexiblemente en que los insurgentes debían simplemente «dejar caer sus armas». Pero durante el curso de 1990 y principios de 1991, aun el gobierno y los voceros de las fuerzas armadas (tanto como el sector privado cuyas propiedades fueron crecientemente afectadas) tuvieron que reconocer, finalmente, el resurgimiento significativo de las capacidades de la guerrilla. Esta admisión implícita de que la guerra podía no ser «ganada» militarmente, creó las condiciones, por primera vez al promediar el primer semestre de 1990, para establecer discusiones acerca del final de la guerra. Ese año vio un proceso de base muy extendida de diálogo nacional que involucró virtualmente a todos los sectores de la sociedad guatemalteca, excepto al gobierno y los militares; y a comienzos de 1991, fue cuando finalmente éstos reconocieron la necesidad de comenzar un serio proceso de negociaciones, dejando caer como precondition que primero se desarmen las guerrillas. Sin duda, el proceso tiene tan altos riesgos como grandes esperanzas, desde que es firmemente criticado por la ultra-derecha civil y militar; promete ser arduo y prolongado, con súbitas marchas y contramarchas: estará acompañado por continua violencia, y probablemente incluirá periódicas escaladas de la guerra. Sin embargo, este proceso es el terreno en el que se dirimirán, en los próximos años, las batallas por el futuro de Guatemala.

Alternativas a la guerra

En el nivel regional, el acuerdo de paz (Esquipulas II) centroamericano de mediados de 1987, pareció abrir inicialmente una alternativa a las décadas de guerra; y por un breve momento, las soluciones políticas para esas guerras parecieron posibles. A través de las negociaciones con los contras, Nicaragua suministró un notable ejemplo de lo que la resolución política en favor de la paz podía lograr. Junto con la abierta oposición dentro de los EEUU al intervencionismo en Centroamérica, el acuerdo pacificador finalmente forzó a la administración Reagan, una vez más en contra de su deseo, a concluir la ayuda militar a los contras.

Sin embargo, en un año, las grandes esperanzas iniciales de paz, se vieron notablemente disminuidas, porque EEUU reafirmó su actitud, si no para controlar el futuro de América Central directamente, al menos para impedir la desmovilización de los contras. Entre tanto, los cuatro gobiernos pro-Estados Unidos rechazaron aplicar los acuerdos en sus propios países. En 1988-1989, sus aún tenues compromisos para la coexistencia pacífica fueron socavados - paradójicamente - por una inclinación hacia la legalidad, que comenzó con la victoria de marzo de 1989 del sector de línea dura anti-Nicaragua en El Salvador. Hacia diciembre de 1989, en una reunión

de presidentes, el acuerdo comenzó a ser un instrumento para la legitimación del régimen de línea dura en El Salvador.

El potencial positivo de los acuerdos fue del todo limitado, en sus consecuencias, porque Washington considera a América Central como dentro de su esfera directa de influencia, y probablemente es la última región del mundo donde está dispuesto a hacer concesiones. En estos momentos, la diplomacia regional está lejos de representar un genuino proceso de paz o un ejercicio de relativa autonomía respecto de EEUU. El futuro progreso hacia la autonomía regional requerirá cambios dentro de esos países. Pero, por el momento, con los sandinistas fuera del poder en Nicaragua, los gobiernos democráticos existentes tienen pocas razones para presionar a los otros a las negociaciones o la democratización.

Si hubiese un arreglo negociado en El Salvador - que, a principios de 1991 parece más posible que antes¹ - constituiría una seria presión para una solución de ese tipo en Guatemala. (Incluso El Salvador es un caso «más fácil» que Guatemala en cuanto la guerra no ha sido tan larga, y las fuerzas armadas están menos atrincheradas y son menos poderosas en relación con la insurgencia). Sin embargo, si esto no pasara pronto, El Salvador podría llegar a parecerse a Guatemala. Esto podría incluir incluso un esfuerzo de última hora de la línea dura salvadoreña para implementar la «solución Guatemala», una guerra total, con muertes masivas al cabo de pocos meses. Además, El Salvador continúa siendo afectado por la situación en Guatemala - como lo mostró en enero de 1990 el asesinato en Guatemala del líder socialdemócrata salvadoreño Héctor Orqueli, que involucró a las fuerzas de seguridad guatemaltecas y a los escuadrones de la muerte, al menos indirectamente -. Tarde o temprano, los que proponen la paz y la democracia en la región se tendrán que confrontar con el estado de contrainsurgencia guatemalteca. Entre tanto, la continuación de la guerra en Guatemala afecta a la región como un todo.

El otro gran factor negativo dentro de la región es la crisis económica, que ha acreado una tasa de crecimiento negativa y ha conducido a un estándar de vida por debajo del de hace 17 años. En algunos países, cerca del 85% de la población vive ahora en la pobreza; la inflación y el desempleo continúan ascendiendo de manera meteórica, dejando a muchos sin otra opción que migrar hacia el Norte. La medicina utilizada para estos males le ha hecho peor a los pacientes: los programas de ajuste estructural y las rígidas políticas neoliberales han tenido efectos desastrosos para las clases populares. Las alternativas al neoliberalismo menos regresivas, in-

¹Efectivamente, a mediados de enero de 1992 se llegó a un acuerdo de pacificación entre el Gobierno y el FMLN que, aunque esperanzador, deberá aguardar la evolución política para corroborar su éxito (NR).

cluyendo la recomposición del Mercado Común Centroamericano sobre la base de políticas reformistas que podrían expandir el mercado interno hacia nuevas exportaciones, aparece inviable por el momento. Tal propósito necesita suficientes recursos financieros de sus apoyos en las Naciones Unidas y Europa occidental, y recibe la oposición de EEUU y las principales agencias prestadoras (FMI, y Banco Mundial).

Estos factores negativos han revitalizado la protesta popular y mantenido a América Central como una zona de suspenso y provocación para EEUU. Incluso, varias de las verdaderas contradicciones que produjeron la revolución nicaragüense se han profundizado y desde la década del 80 acarrearón las más grandes desigualdades y crisis económica, y no trajeron crecimiento. La continuación de la protesta no implicará por sí misma nuevas victorias; pero es probable que el proceso revolucionario continúe en el futuro que se avizora, tanto en las formas tradicionales (si fuera necesario) o bajo nuevas formas.

El contexto hemisférico

Dentro del más extenso contexto latinoamericano, el balance es también mixto. Por un lado, avances significativos y sin precedentes a fines de los 80 para las fuerzas populares y de izquierda en Brasil y México anuncian la posible expansión de modelos «democráticos» (electoral y de movilización, tanto dentro como fuera del sistema electoral) para volver a aspirar al cambio social en el continente. En México, el desafío al régimen de partido único encarnado por el PRI, y en Brasil la posibilidad de reemplazar 25 años de dictadura militar y contrainsurgencia política con políticas populares de bases extendidas, representaron importantes pasos hacia adelante. Aunque sus avances resulten lentos e inconclusos, difíciles de sostener y, hasta aquí, programáticamente débiles, es probable que amplios bloques populares o de izquierda emerjan en algunos países.

Pero, por otro lado, hay dos factores abrumadoramente negativos. El primero es el empobrecimiento estructural de América Latina. A través de todos los indicadores, de acuerdo a las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, el estándar de vida en América Latina es mucho más bajo hoy que hace 10 años, y no hay indicios de que esta tendencia vaya a revertirse. Además, la crisis económica de la década del 80 puso fin al período de crecimiento para las economías de casi toda América Latina. La crisis de la deuda ha dejado virtualmente a todos los países dependiendo del FMI, pero las políticas neoliberales de este organismo han agravado seriamente las crisis sociales. El dogma neoliberal está corriendo desen-

frenadamente: por ejemplo, aunque la derrota de Vargas Llosa en junio de 1990 en el Perú demostró el rechazo popular a tales políticas, el triunfador Fujimori ha implementado una versión aún más extrema. Las iniciativas económicas de Estados Unidos (la «Iniciativa para las Américas» de Bush y los planes de un mercado común norteamericano) dominan la agenda económica. Entretanto, las genuinas alternativas económicas para América Latina que combinen el crecimiento con la igualdad social y las consideraciones ecológicas, que busquen establecer una relación más favorable con el mercado mundial - y que deben ser regionales en sus términos - necesitan definirse a través de proyectos concretos.

El segundo desarrollo negativo es la reaparición de un abierto intervencionismo de EEUU en el hemisferio, como se vio en la invasión de Panamá y los avances de las operaciones militares de Estados Unidos en las guerras de las drogas. Tal intervencionismo ha generado respuestas nacionalistas de amplios sectores de la sociedad latinoamericana y de algunos gobiernos, pero estos últimos han estado tan debilitados por el colapso económico que sus protestas son principalmente formales (por ejemplo, después de la invasión a Panamá). Estas afirmaciones de «relativa autonomía» respecto de EEUU retomaron antiguas expresiones (por ejemplo, la iniciativa Contadora y el proyecto de reincorporar a Cuba en el sistema interamericano). Probablemente tales expresiones continuarán el reloj no puede volver a 1965, cuando la OEA envió tropas para convalidar la invasión de Estados Unidos a República Dominicana -, pero hasta aquí su impacto será bastante relativo.

El otro blanco principal del intervencionismo es Cuba. Casi ininterrumpidamente desde 1959, la política de EEUU ha sido gobernada por una obsesión hacia Cuba que ha provocado que una «nueva consideración» resulte casi imposible, especialmente hacia América Central y el Caribe. El triunfalismo de EEUU por las victorias en Panamá, Nicaragua y el Golfo Pérsico pueden hacer la década del 90 particularmente peligrosa para Cuba. El futuro de Cuba dependerá ante todo de la habilidad del gobierno y la sociedad cubanos para responder a las presiones internas de cambio político y resolver la crisis económica; pero al mismo tiempo, hay ominosos signos de que Estados Unidos ve una oportunidad para «ir a negociar», para reclamar al hemisferio entero una desestabilización del gobierno cubano. Si tales esfuerzos tuvieran éxito, el impacto para América Latina sería devastador.

Centroamérica en el nuevo desorden internacional

Internacionalmente, el fin de la década del 80 inició un período de reestructuración profunda e inesperadamente rápida, que incluye «el fin de la Guerra Fría» y la pe-

restroika en el mundo socialista. En este sentido, para reducir las tensiones Este-Oeste, estos cambios, inicialmente, mantuvieron la esperanza de soluciones negociadas para los conflictos regionales de larga data. En principio, «el fin de la Guerra Fría» removió al «enemigo» comunista y, por ende, las bases del rígido y maniqueo pensamiento anticomunista en Estados Unidos, y fijó las bases de una desescalada de los conflictos en la región. Las realidades de la crisis interna de la ex-URSS y la debilidad internacional han viciado consecuentemente el potencial para un rol soviético más importante en el Tercer Mundo. Combinados con los cambios económicos en la economía capitalista internacional, que además empobrecen la mayoría de las áreas del Tercer Mundo, la nueva coyuntura deja progresivamente a los países pobres con menos opciones que antes.

Para América Central, al menos en el corto plazo, estos cambios reducen los márgenes de maniobras o la «relativa autonomía» respecto del principal poder externo - los EEUU - y deja inciertas perspectivas para la paz. En este caso, la paz requeriría una evolución en el pensamiento de los operadores políticos de Estados Unidos tan profundo como el que inicialmente ocurrió en la ex-Unión Soviética. Tal «nuevo pensamiento» en Washington implicaría el abandono de todas las premisas de la Guerra Fría e implicaría redefinir los «intereses de Estados Unidos»; habría que incluir un reconocimiento de las raíces estructurales (no «comunistas») de los movimientos revolucionarios en América Central, y la realidad y legitimidad de las luchas populares por la justicia social. Hasta el momento, antes que una evolución semejante en la mentalidad de los operadores políticos de Washington, ha habido un endurecimiento del intervencionismo de Estados Unidos en el hemisferio y una continua adhesión al supuesto básico de la mentalidad geopolítica «Este-Oeste». (Por ejemplo, aun después de que los sandinistas aceptaron su derrota electoral y pacíficamente transfirieron su poder a la UNO, EEUU continuó las presiones para su remoción de todas las posiciones de poder, en parte sobre la base del supuesto de la «teoría del dominó» ya que su presencia alimentaba la insurgencia del FMLN en El Salvador. Otro ejemplo es el endurecimiento de la línea de EEUU hacia Cuba.)

Pero el mundo está cambiando a un ritmo y en modos antes inimaginados. El poder económico de EEUU en el mundo entero se está encaminando hacia una progresiva declinación aun cuando este hecho se vea virtualmente oscurecido por la atronadora victoria militar en el Golfo Pérsico. E incluso aunque el triunfo militar pretenda una «Pax Americana» en el futuro inmediato las contradicciones sociales y políticas al largo plazo y la desestabilización, producida como consecuencia de las acciones estadounidenses en la región pueden frustrar sus objetivos. Desde esta

perspectiva, no descartaríamos la posibilidad de que EEUU y sus aliados contrainsurgentes puedan eventualmente ser forzados a negociar un final para las guerras en América Central y permitir iniciativas a las fuerzas populares en otros países latinoamericanos. Ciertamente, esto es difícil de entrever; pero EEUU se enfrenta con restricciones en su habilidad para controlar a América Latina (límites presupuestarios, otras prioridades internacionales, etc.).

Sin embargo, vemos que en lo inmediato EEUU ha respondido a los cambios internacionales reforzando su «natural» esfera de influencia en este hemisferio. Con respecto al alcance que pudieron tener los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética para suprimir importantes restricciones sobre la intervención de Estados Unidos en el Tercer Mundo, el nuevo orden global (o desorden) puede ser aun más peligroso. Al mismo tiempo, los gobiernos de Europa occidental - que durante la década del 80 apoyaron las negociaciones regionales y los derechos humanos, y generalmente sirvieron como contrapeso de las políticas de Estados Unidos en América Central - han debilitado bastante su perfil en la región; es improbable que contribuyan con significativos recursos materiales para América Central, en vista del crecimiento de las relaciones económicas con Europa del Este. Esto deja el futuro de América Central ante todo, en las manos de Estados Unidos y el FMI, que están completamente comprometidos en políticas neoliberales.

Aún antes de la guerra del Golfo, había indicios de un creciente intervencionismo de EEUU en el Tercer Mundo. Como se ve en importantes documentos políticos (v.g. «Disuasión a la Discriminación», una recomendación bipartidista de alto nivel de 1988 para mayor asistencia a la contrainsurgencia con menos restricciones, y consecuentemente, una revisión de la seguridad nacional de la administración Bush, *New York Times*, 23/2/91). Los operadores políticos de EEUU procuran más y no menos confrontaciones armadas con los «enemigos» del Tercer Mundo (marxistas-leninistas, terroristas, narcotraficantes, etc.), y consideran la necesidad de derrotar a tales enemigos «decisiva y rápidamente». El Pentágono también reafirmó su convicción de que la «amenaza soviética» permanezca íntegra en el Tercer Mundo, y que EEUU pueda continuar apoyando allí «combatientes de la libertad» y usando su poder militar. Esto se mezcla con una mentalidad casi mesiánica en los círculos políticos estadounidenses y entre los intelectuales políticos (Brzezinski, Huntington y otros), insistentemente reflejados en los medios masivos, en los que las contradicciones del socialismo se discuten para demostrar el absoluto «triunfo del capitalismo» - mientras que la absoluta miseria del Tercer Mundo, que es una parte integral del capitalismo mundial, queda totalmente ignorada -.

Al mismo tiempo, se ha atenuado decisivamente otro gran freno para la intervención de Estados Unidos en el Tercer Mundo: la oposición a tales intervenciones por parte de la opinión pública norteamericana (el «síndrome de Vietnam»). Durante toda la década del 80, EEUU ha evitado invadir directamente América Central por falta de apoyo público: las encuestas de opinión de 1979 han mostrado consistentemente que alrededor de las dos terceras partes del público americano se oponía a las políticas intervencionistas en América Central, aun cuando estaban dirigidas por un presidente muy popular, y aun cuando apelaban a través de fórmulas tales como «parar al comunismo». Fue por esta razón que la administración Reagan tuvo que encauzar fondos para los contras ilegalmente (de aquí el escándalo del Contragate).

La administración Bush, que en algunos aspectos continuó la política de Reagan en América Central, entendió el imperativo de sobreponerse a las grandes debilidades de la política contra de Reagan, el escaso apoyo encontrado en el Congreso y en el público americano. (Acerca de otra salida para América Central, muchos demócratas han sido complacientes desde 1984.) Bush y el secretario de Estado, Baker, emplearon el «acuerdo bipartidista» de marzo de 1989 con los congresistas demócratas para reparar el daño del Contragate y obtener una virtual luz verde para el intervencionismo en América Central (continuando la ayuda «humanitaria» a los contras, la guerra económica contra Nicaragua, y la ayuda a la contrainsurgencia de Guatemala y El Salvador). Y con la invasión a Panamá en diciembre de 1989, ni los demócratas del Congreso ni la opinión pública de EEUU objetaron siquiera la implicación directa de las tropas de Estados Unidos, mucho más porque esa intervención fue «exitosa» y no se prolongó ni tuvo costos en vidas humanas norteamericanas. Si no había dudas acerca de esto después de Panamá, cualquier vestigio parece haber sido borrado por las respuestas nacionales a la guerra del Golfo.

Este desarrollo tan negativo es quizás una expresión de lo que Fred Halliday ha identificado como una «cuasi-totalitaria», antiinternacionalista, anti-Tercer Mundo cultura política que corre desenfrenada por todo el mundo capitalista avanzado. En Estados Unidos, esta tendencia puede ser verdaderamente contrabalanceada en la década del 90 sólo por el renacimiento de los movimientos populares de base, particularmente por los que luchan por los derechos de las mujeres y la gente de color - y por el nacimiento de una nueva cultura política que crezca fuera de estos movimientos, tan internacionalista como igualitaria en sus perspectivas -.

El problema del poder de EEUU en América Central es en gran medida el problema de cómo la clase dominante mantiene su presión hacia la opinión pública americana. El movimiento anti-intervención en EEUU jugó un rol importante al derrotar la ayuda militar a los contras, pero nunca fue capaz de forzar un debate abierto alrededor de la devastadora guerra económica que destruyó a Nicaragua. No fue efectivo respecto de las justificaciones jingoístas del ataque a Panamá. Mientras la base eclesial y otras fuerzas movilizaron presiones públicas significativas contra la ayuda militar para El Salvador, ellos no se confrontaron de manera efectiva con la muy deliberada política de la administración Bush de «sobreponerse» al síndrome de Vietnam y reconstruir el «consenso bipartidista» con respecto a América Central.

A principios de la década del 90, un resurgimiento de movimientos de base popular en Estados Unidos parece posible, especialmente entre las mujeres y las comunidades minoritarias. En principio, el fin de la Guerra Fría ha creado un espacio para demandar un «dividendo de paz» para las comunidades encabalgadas en la pobreza, desocupados, sin hogar, y las drogas - problemas que conciernen particularmente a la gente de color y a las mujeres -. También crearon un espacio para cuestionar un «consenso bipartidista» basado en anticuadas ideologías de la Guerra Fría en áreas como América Central. Pero todo ese potencial abierto dentro de EEUU está en peligro de ser cerrado, a causa de la estela que ha dejado la guerra del Golfo y ante la posibilidad de nuevas intervenciones militares en el Tercer Mundo.

Para resumir: el orden «post-Guerra Fría» no es necesariamente el opuesto a la Guerra Fría en el Tercer Mundo (es decir, paz), sino más bien un período de transición altamente volátil, cuyo éxito es incierto. Los factores más negativos son la miseria estructural (agravada por las políticas neoliberales), y las decrecientes restricciones internacionales hacia el intervencionismo de Estados Unidos, al menos en el corto plazo. Si algo puede detener la mano de la intervención, y desafiar su creación - el estado de contrainsurgencia - lo más probable es que haya alguna combinación de fuerzas populares y revolucionarias que acumulen sus energías y aprendan de las grandes negociaciones políticas que se sucedieron durante la década del 80. Estas fuerzas no son lo suficientemente poderosas como para triunfar sin reservas, pero son muy consistentes como para ser derrotadas o desestimadas. El futuro inmediato muestra muchas dificultades para las clases populares en América Central; pero a largo plazo, las contradicciones de la crisis estructural y la intervención de EEUU podrían favorecer a las fuerzas popular/revolucionarias en aquellos países donde están bien organizadas, donde tienen bases extensas y son capaces de

desarrollar estrategias apropiadas a las nuevas condiciones. Quizás podemos arriesgarnos a esperar que la prolongación de las luchas centroamericanas en la próxima década traiga beneficios concretos y, dentro de un muy difícil contexto internacional, expandan los límites de lo «posible».

Traducción: Raquel Ardiz